


RV: NOTIFICACIÓN ADMISIÓN DEMANDA Rad. 76001-3105-017-2024-00228-00

Vivian Carolina Barliza Illidge <vbarliza@procuraduria.gov.co>

Jue 29/08/2024 8:23

Para: Juzgado 17 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (302 KB)

CONCEPTO JUZGADO 17 LABORAL NORBY CECILIA DURAN INEFICACIA OK.pdf;

Buenos días,

En atención al correo que antecede, mediante el cual informa el curso del proceso promovido por la señora NORBY CECILIA DURAN MENA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, con expediente radicado bajo la partida No. 76001-3105-017-2024-00228-00, adjunto remito CONCEPTO de la suscrita en calidad de Agente del Ministerio Público.

Cordialmente,

Vivian Carolina Barliza Illidge

Procurador Judicial I

Procuraduría 8 Judicial I Asuntos del Trabajo y Seguridad Social Cali

vbarliza@procuraduria.gov.co

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP:

Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808

Calle 11 # 5-54 P4 Edif Bancolombia, Cali

De: Juzgado 17 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 20 de agosto de 2024 8:09

Para: Vivian Carolina Barliza Illidge <vbarliza@procuraduria.gov.co>

Asunto: NOTIFICACIÓN ADMISIÓN DEMANDA Rad. 76001-3105-017-2024-00228-00

Santiago de Cali, 20 de agosto de 2024

Doctora:

VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE

Procuradora 8 Judicial I para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social

vbarliza@procuraduria.gov.co

Adjunto remito aviso de notificación conforme lo dispone el Art. 41 del CPTSS y el Art. 8 de la ley 2213 de 2022.

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DTE: NORBY CECILIA DURAN MENA

DDOS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

RAD: 76001-3105-017-2024-00228-00

Anexos: Se adjunta acta de notificación, demanda, anexos y el auto admisorio

Por favor acuse recibo de la presente comunicación a la mayor brevedad posible, en todo caso y a falta de dicha confirmación, se advierte que se presume la recepción del presente mensaje, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 20, 21 y 22 de la ley 527 del 18 de agosto de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales.

Igualmente es preciso indicarles que cualquier comunicación que se remita a este despacho judicial se recibirá a través del correo electrónico: j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co, en horas hábiles que son de 8:00 de la mañana a 12:00 p.m. y de 1:00 pm a 5:00 p.m., los correos que sean enviados después de las 5:00 pm, serán recibidos con fecha del día hábil siguiente a su envío.

CARLOS ARTURO GUERRERO VARGAS
Citador

JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI



j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono (602) 8986868 Ext. 1211

Carrera 10 # 12 - 15, Torre A, piso 5

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía"

Cali – Valle del cauca

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. *****NOTICIA DE CONFORMIDAD***** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



Santiago de Cali, 29 de agosto de 2024

SIGDEA E-2024-560583

Señor

JUEZ DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

Asunto: INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO
Proceso: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
Demandante: NORBY CECILIA DURAN MENA
Demandado: COLPENSIONES – COLFONDOS S.A
Radicado: 76001-31-05-017-2024-00228-00

VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE, identificada con cédula de ciudadanía No. 53905588 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 155.611 del C. S. de la J., en calidad de Procuradora 9 Judicial I para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, acudo a su Despacho en intervención judicial, dentro del proceso de la referencia, no como parte en causa, sino como agente del Ministerio Público, sujeto procesal especial interviniente en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, en los siguientes términos:

1. Fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales en relación con la intervención del Ministerio Público en los procesos laborales.

De conformidad con el Núm. 7º del Art. 277 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus Delegados *“Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos o garantías fundamentales”, por su parte el Art. 16 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala que “El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos laborales de conformidad con lo señalado en la ley”.*

En relación con los Procuradores Judiciales, quienes además de tener la condición de agentes del Ministerio Público, el Art. 48 del Decreto-Ley 262 de 2000, dispone que actuarán ante las salas laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los juzgados laborales, los tribunales de arbitramento a que se refiere el Código Sustantivo del Trabajo y demás autoridades que señale la ley, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, las garantías y derechos fundamentales, individuales o colectivos de los trabajadores y pensionados o de las minorías étnicas, Igualmente, intervendrán en los procesos laborales en que sean parte incapaces, cuando éstos no tengan quien los represente.

La intervención de la Procuraduría en su condición de Ministerio Público en la Jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, es reiterada en el Código Procesal del Trabajo al ordenar correr traslado de la demanda (Art. 74) y demanda de reconvencción (Art. 76).

En lo que tiene que ver con el Código General del Proceso, el artículo 45 señala ante qué autoridades ejerce sus funciones el Ministerio Público, determinando que lo hace ante la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los jueces del circuito, municipales y de familia, las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y los tribunales de arbitraje, señalando en su parágrafo que las funciones asignadas a los procuradores delegados podrán cumplirla los procuradores judiciales que actúen bajo su delegación y dirección.



Por su parte el artículo 46 de la normatividad antes citada, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, el Ministerio Público ejercerá las siguientes funciones:

- “1. Intervenir en toda clase de procesos, en defensa del ordenamiento jurídico, las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales o colectivos.
2. Interponer acciones populares, de cumplimiento y de tutela, en defensa del ordenamiento jurídico, para la defensa de las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales o colectivos, así como de acciones encaminadas a la recuperación y protección de bienes de la nación y demás entidades públicas.
3. Ejercer las funciones de defensor de incapaces en los casos que determine la ley.
4. Además de las anteriores funciones, el Ministerio Público ejercerá en la jurisdicción ordinaria, de manera obligatoria, las siguientes:
 - a) Intervenir en los procesos en que sea parte la nación o una entidad territorial.
 - b) Rendir concepto, que no será obligatorio, en los casos de allanamiento a la demanda, desistimiento o transacción por parte de la nación o una entidad territorial.
 - c) Rendir concepto en el trámite de los exhortos consulares.

PARÁGRAFO. El Ministerio Público intervendrá como sujeto procesal especial con amplias facultades, entre ellas la de interponer recursos, emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas.

Cuando se trate del cumplimiento de una función específica del Ministerio Público, este podrá solicitar la práctica de medidas cautelares.”

De lo anterior se puede concluir que el Código General del Proceso, también da amplias facultades de Intervención judicial al Ministerio Público, a través de los Procuradores Delegados o de los Procuradores Judiciales que estén bajo su delegación y dirección, señalando las funciones que ejercerá o las que estén fijadas en leyes especiales.

2. LO QUE SE DEMANDA

La señora NORBY CECILIA DURAN MENA, formula demanda ordinaria laboral en contra de la administradora de fondos de pensiones y cesantías., COLFONDOS S.A., y la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, para que se declare la nulidad e ineficacia de su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por COLFONDOS S.A., por falta de información.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A. trasladar al régimen de prima media con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, la totalidad de los valores que recibió con motivo de su afiliación.

3. ADMISIÓN DE LA DEMANDA

Mediante auto, el Despacho admite la demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, ordenando la notificación a las partes y a la ANDEJE.

A través de correo electrónico del 20 de agosto de 2024, se notificó al Ministerio Público sobre la admisión de la demanda.



4. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

En el presente proceso se debe establecer i) si en el trámite de traslado de Régimen de Prima Media con Prestación Definida realizado por la señora NORBY CECILIA DURAN MENA, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través del fondo de pensiones y cesantías COLFONDOS S.A., se realizó con observancia del deber de información a través de elementos de juicio claros, completos y comprensibles, con la finalidad de establecer si la afiliada contaba o no con el conocimiento necesario para adoptar una decisión libre y voluntaria, de conformidad con lo señalado en la Ley y los parámetros fijados por la Jurisprudencia, aspecto fundamental para determinar la eficacia del traslado de régimen con las consecuencias del mismo.

5. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Es pertinente señalar como primera medida, que el Sistema General de Seguridad Social Integral, fue creado mediante la Ley 100 de 1993 cuya dirección, coordinación y control le corresponde al Estado, orientado a buscar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, siendo uno de sus pilares, el sistema general de pensiones, estableciendo en el Art. 12 reglamentado por el Decreto 3995 de 2008, dos regímenes de administración del sistema general de pensiones solidarios excluyentes, con características disímiles, pero que coexisten a los que pueden estar sometidos los recursos originados en los aportes que están obligados a pagar trabajadores y empleadores, para efectos de cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Estos son:

- a) Régimen solidario de prima media con prestación definida, y
- b) Régimen de ahorro individual con solidaridad.

La selección de uno cualquiera de los dos regímenes previstos es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado, de conformidad con lo señalado expresamente, en el literal b, del Art. 13 de la Ley 100 de 1993, que a la letra dispone:

“ARTICULO. 13.- Características del sistema general de pensiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 3995 de 2008, Reglamentado por el Decreto Nacional 1051 de 2014. El sistema general de pensiones tendrá las siguientes características:

a)

b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley;”.

Cabe señalar que respecto a la ineficacia del traslado de régimen pensional por no haberse efectuado la vinculación bajo los parámetros de la libertad informada, existe una línea jurisprudencial de la Sala Laboral de Corte Suprema de Justicia, visible entre otras, en sentencia de radiación 31989 del 09 de septiembre de 2008, MP. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia de radicado 33083 del 22 de noviembre de 2011, así como en las proferidas SL-12136-2014, SL19447-2017, SL-4964-2018, SL4689-2018 y SL-1452-2019 del 03 abril-2019, entre otras, en las cuales se puntualizó que para efectos de optar por alguno de los dos (2)

regímenes pensionales existentes “...el literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993 dispuso la obligatoriedad de que tal manifestación fuera libre y voluntaria (...)”.

Para la citada Corporación, es fundamental la información a cargo de los fondos administradores de pensiones, por lo cual en la sentencia CSJ-SL1452-2019 se incluyó un cuadro en donde se sintetiza hasta hoy tal evolución, incluida la re asesoría:



Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n. 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Cabe señalar que, el numeral 1 del artículo 97 Decreto 663 de 1993, *“Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”*, el cual es aplicable a las AFP desde el momento de su creación, prescribió la obligación de *“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”*.

Dicha norma además en su artículo 12 señaló que las decisiones que puedan tomar los clientes deben estar *“...debidamente informadas, conociendo cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas...”*.

Así mismo, el Decreto 1661 de 1994, del artículo 3 estableció el deber que tienen las administradoras de informar a las personas afiliadas sobre la posibilidad de retractarse, obligación que debe manifestarse por escrito al momento de la afiliación o traslado.

De otro lado, es pertinente mencionar que la Honorable Corte Constitucional profirió la sentencia SU-107 de 9 de abril 2024¹, en donde reiteró como se ha planteado, que es deber de las AFP privadas garantizar el deber de información en cuanto a ventajas y desventajas de uno y otro régimen pensional de cara al eventual reconocimiento de una prestación por vejez, lo cual

¹ Cabe mencionar que el texto completo de la sentencia fue publicado el 9 de mayo de 2024



materializa el derecho a la seguridad social de un afiliado; no obstante, fue enfática en establecer que no podía exigírsele a una sola parte, sea demandada AFP o demandante, probar la falta de consentimiento informado pues a juicio de dicha Corporación, resulta desproporcionado la aplicación del principio procesal de la carga de la prueba solo en cabeza de la entidad demandada.

Indicó a su vez que, al recaer exclusivamente la carga de la prueba en las administradoras de pensiones de manera estricta, se estaría liberando al demandante de presentar cualquier prueba, indicio, evidencia o fundamento razonable sobre la existencia del derecho laboral que reclama, además que, se exonera al juez de decretar y practicar pruebas de manera oficiosa.

En ese contexto, según la providencia en mención la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ello la verdad que le permita luego de una valoración, conforme a las reglas de la sana crítica, resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En el anterior sentido, concluye la H. Corte Constitucional que deben ser valoradas, las pruebas documentales, interrogatorios de parte y testimonios allegados, así mismo, la aplicación de la facultad de la declaratoria de la prueba oficiosa por parte del juez.

En consecuencia, se deberá demostrar a través de los medios probatorios pertinentes por la parte demandante, que no recibió la información necesaria, completa y comprensible de las consecuencias jurídicas del traslado de régimen y por su parte la AFP demandada, deberá acreditar que cumplió con dicho deber de información, consagrado en numeral 1 del artículo 97 Decreto 663 de 1993 el cual se reitera, le es exigible desde el momento de su creación.

Ahora bien, es pertinente indicar que, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia mencionada, la devolución de las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada, al no hacer parte de la cuenta de ahorro individual no son susceptibles de devolución o traslado, cuando se configuraron situaciones que se consolidaron en el tiempo que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional.

6. NOTIFICACIONES

A la suscrita, a través del correo electrónico institucional vbarliza@procuraduria.gov.co.

Del Señor Juez, atentamente,

VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE
Procuradora 8 Judicial I para Asuntos Laborales de Cali